



EL TIEMPO

El Regreso a la Normalidad en el Llano



Continúa la tranquilidad en el Llano
Se firmó el Acta de la Paz

de la P...

Se Fijan los Precios para la Comida
Distribución del Petróleo en el País

Primera parte:
El conflicto

Capítulo 1

Orígenes: guerra en la periferia



Agradecimientos

La preparación de los tres primeros capítulos contó con la colaboración del Comité Académico del Informe, con el cual se diseñó la estructura de esta primera parte. Un especial reconocimiento a sus integrantes, así como a Fernán González y Marco Palacios por la elaboración de los recuadros respectivos.

Este capítulo examina los orígenes del conflicto armado, no por erudición histórica sino para entender su naturaleza. La idea básica podría parecer polémica y en realidad es sencilla: con todo su horror y su dolor, el conflicto se ha ensañado sobre todo en la “periferia” campesina y ha sido marginal al sistema político colombiano. Esta “marginalidad” —que sin duda ha disminuido de manera dramática en los últimos años— fue sin embargo decisiva para formar el carácter y los modos de actuar de los armados, de suerte que el remedio del conflicto pasa por apreciar aquella marginalidad.

El capítulo empieza por resumir y entrelazar tres hipótesis históricas ya bastante bien establecidas. Primera: en las zonas de colonización hay espacio para ejércitos no estatales. Segunda: el Frente Nacional puso fin a “La Violencia” pero dejó remanentes de guerrilla “social” en el campo. Tercera: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —Ejército del Pueblo (Farc-ep, o simplemente Farc) nacieron de tales remanentes, como un proyecto revolucionario pero marginal en términos geográficos y políticos; otras guerrillas, pese a ser más urbanas en su origen, también acabaron en la periferia; y lo propio sucede con los paramilitares.

Más importante: aunque las revoluciones suelen tener origen campesino, en Colombia no se daban las condiciones para el triunfo de la insurgencia, así que ésta se desvió o en todo caso no pudo llegar al centro de la política. Pero también el Estado fracasó en no haber podido prevenir ni resolver el conflicto; y es porque, en virtud de su fragmentación, la “clase dirigente” no articuló una estrategia proporcionada a la gravedad, complejidad, profundidad y persistencia del problema, vale decir, no lo ubicó en el centro de la política.

Se advierte que las palabras “centro” y “periferia”, igual que otras expresiones similares, se utilizan aquí como un

recurso descriptivo y sin las implicaciones dualistas que les dan ciertos teóricos. Como referente geográfico, político y cultural, la “periferia” alude a regiones menos pobladas, más campesinas, menos integradas al mercado, con menos poder político y a menudo discriminadas o explotadas por el “centro”. Pero esta alusión debe matizarse en cuando menos cuatro sentidos: primero, “periferia” y “centro” no son categorías rígidas, sino atributos relativos y de grado; segundo, su extensión e intensidad varían con el paso del tiempo; tercero, no son internamente homogéneos sino que admiten diversas modalidades; cuarto, y en especial, no son universos aislados sino que interactúan de maneras muy complejas.

Sobre este entendido, en la sección E se dice cómo y por qué la “marginalidad” del conflicto no lo excluye del “centro”: las raíces, el motor, el objetivo y —cada vez más— el escenario de la lucha armada están principalmente en ese “centro”. Los capítulos siguientes, en especial el 4, detallarán mejor este último proceso.

A. El escenario

Por razones climáticas, la población precolombina se había concentrado en la región andina. Los españoles fundaron ciudades-puerto en el Caribe y centros poblados en el eje andino, alrededor de los cuales establecieron encomiendas y resguardos. Con esto se origina una estructura bimodal de tenencia de la tierra: o latifundios (encomiendas no divididas) o minifundios (encomiendas o resguardos divididos).

En el minifundio trabaja toda la familia campesina, o sea que aquí hay un excedente de mano de obra relativo a los demás factores de producción; pero el latifundio absorbe poca mano de obra, porque su uso de la tierra es extensivo. Así se produce un excedente de población rural, que típica-

mente migra hacia las ciudades, pero también constituye un “ejército de reserva” para colonizar nuevas zonas de frontera.

La migración a esas zonas es un proceso complejo que puede ser directo o por etapas y donde pesan factores de “atracción” y de “expulsión”. Pero, dadas la falta de reforma agraria y la abundancia de tierras sin ocupar, la colonización ha sido una “válvula de escape” para la presión demográfica (y para aplazar las reformas sociales en el “centro”).

Históricamente, el proceso de colonización “tuvo lugar en dos grandes márgenes geográficos por fuera del *heartland* colombiano o eje andino” (Gouësset, 1998):

- En los “márgenes cercanos”, correspondientes a las llanuras del Caribe y a las vertientes externas de los Andes (y sus respectivos pie de montes). Esta fase duró hasta bien entrado el siglo xx y sus grandes oleadas fueron la colonización antioqueña, la de las llanuras costeñas y la del Magdalena medio. Su lógica podría describirse como de “conexión” (del Caribe con los Andes) y “densificación” (incorporación plena de las llanuras y pie de montes). Con excepción del café, esa colonización abrió nuevas áreas para el latifundio; así se mantuvo la dualidad (minifundio en los Andes y

La colonización ha sido un proceso espontáneo y no dirigido por el Estado. Expulsado por la pobreza o la violencia y atraído por la ilusión de prosperidad e independencia, el colono típico “tumba monte” y se endeuda con un socio capitalista o con proveedores locales para explotar su parcela.

la zona cafetera; latifundio dentro y, sobre todo, fuera de los Andes).

- En los “márgenes lejanos”, o llanuras y bosques de la Costa Pacífica, la Orinoquia y la Amazonia. Esta fase se aceleró durante las últimas décadas como resultado del ya dicho excedente demográfico, del desplazamiento forzado por la violencia y de bonanzas locales lícitas (petróleo, banano, esmeraldas, oro, caucho, etc.) o ilícitas (contrabando, coca, amapola, etc.). Sobre esta especie de “U” que desde el sur envuelve al “centro” del país se encuentran las zonas de colonización reciente, donde el conflicto ha encontrado nuevas y poderosas fuentes de alimentación (Mapa 1.1).

Salvo excepciones menores o parciales, la colonización ha sido un proceso espontáneo y no dirigido por el Estado.

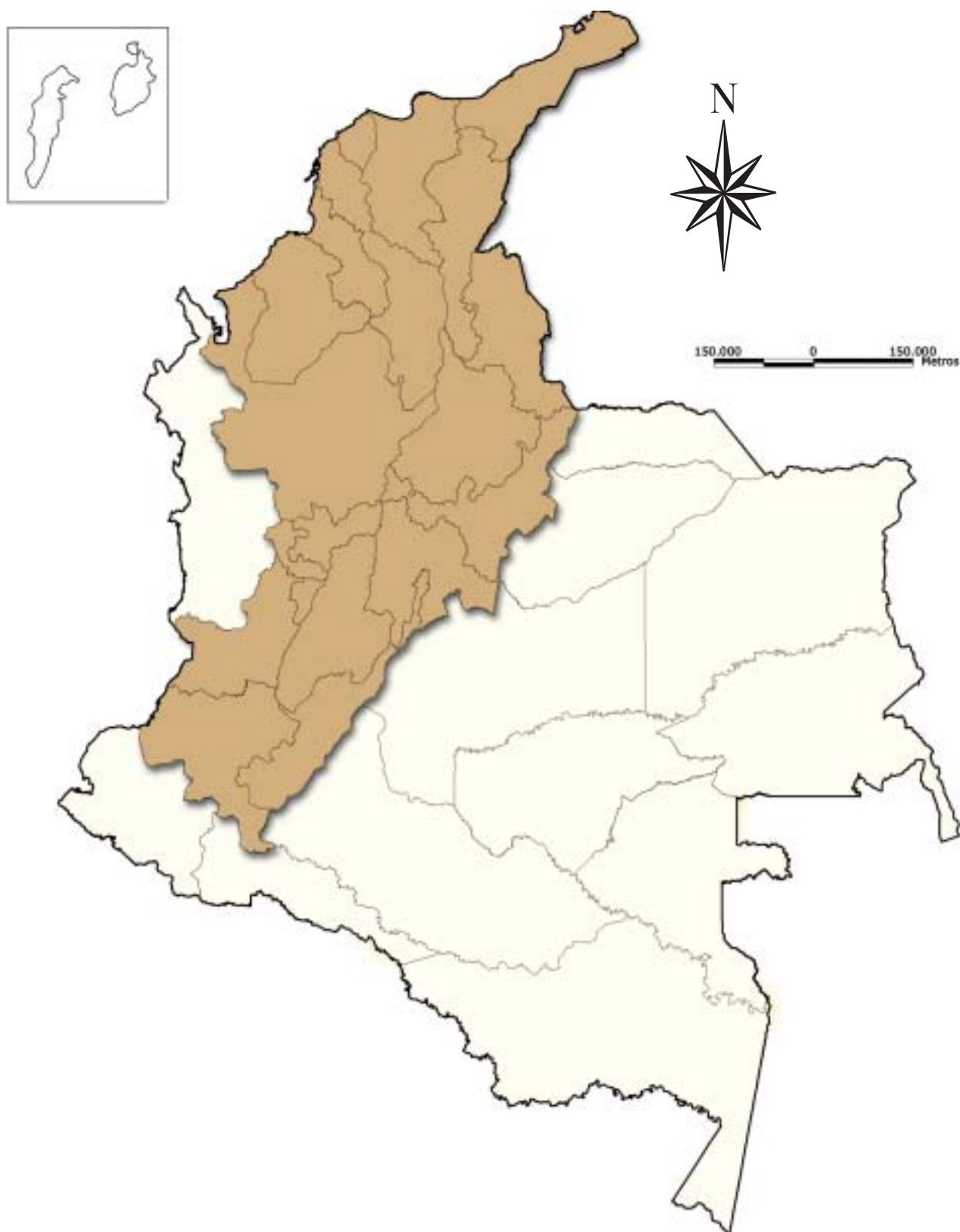
Expulsado por la pobreza o la violencia y atraído por la ilusión de prosperidad e independencia, el colono típico “tumba monte” y se endeuda con un socio capitalista o con proveedores locales para explotar su parcela. Pero el colono tiene pocas probabilidades de éxito: la inexistencia o escasez de ahorros iniciales, la carestía de los suministros, las dificultades de comercialización, la inestabilidad en el precio de los productos que ofrece, la falta de servicios y subsidios estatales, y los monopolios que enfrenta al comprar o vender, corren todos en su contra. Así, una mala cosecha significa que el socio capitalista o terrateniente en potencia se queda con la tierra y sus “mejoras”, lo cual reinicia el ciclo de latifundio y trabajadores desposeídos que buscan otra oportunidad.

Cada territorio de colonización es pues un cementerio de ilusiones. Campesinos que soñaron con su “finca” o ciudadanos que creyeron en toda suerte de empresas descabelladas y medio oscuras: poner un bar, alquilar lanchas (*johnsons*), exportar pájaros tropicales, “enguacarse” con oro o esmeraldas, robar bonitamente a los indígenas, sembrar cacao, marihuana o palmitos según esté el negocio, vender sexo a sobreprecio, construir casas o piscinas cuando hay *boom*, jornalear en banano o en palma por un salario bueno, reclutar incautos para una nueva religión, entrar de raspachín para acabar tal vez de químico, llegar de policía, de inspector o de juez y hacerse rico, olvidar, olvidar en todo caso, y volver a empezar otro proyecto que esta vez sí me sacará de pobre. Algunos, en efecto, salen de pobres. Otros muchos

salen a ratos de la pobreza, porque casi siempre resulta alguien más vivo que estafa al empresario medio oscuro. La historia se repite con variantes en cada vida y cada territorio, aunque el paso del tiempo va decantando quiénes son los dueños y de qué son dueños.

Dicho de otro modo: en esas zonas de “frontera interna”, los derechos de propiedad están en curso de definición o tienden a ser precarios. Los derechos de propiedad deciden quién se apropia del producto del trabajo, del capital, de la naturaleza, del esfuerzo colectivo, del gasto público y de todos los bienes o servicios que existan en el momento (North, 1990: 33). Estos derechos son pues la base del orden social y su precariedad o definición imprecisa es una fuente de incertidumbre, inestabilidad y conflictos, así esa

Mapa 1.1. Mapa de la “U”



misma indefinición permita que cada individuo crea que tiene un *chance*, que compita con todas sus energías y, en fin, que algunos prosperen.

Aunque las zonas de colonización varían con su edad, su base económica y su cercanía al mercado (entre otras variables importantes), tienden pues a compartir cierta “cultura de frontera”, que por un lado incluye el esfuerzo, la creatividad, la apertura y la movilidad social, pero por otro sufre la incertidumbre, la vulnerabilidad, el engaño y la indefensión frente al más rico, el más astuto, el más poderoso o el mejor armado.

En este sentido es cierto, como se dice a menudo, que el problema central de esas tierras de colonización es “la ausencia de Estado”. No tanto (o en todo caso, no sólo) porque

El asesinato de Gaitán (1948) produce un estallido en Bogotá y otras ciudades, que no derroca al gobierno pero desencadena la violencia campesina en dos “márgenes cercanos”: en los llanos orientales, donde la guerrilla es más disciplinadamente liberal, y en zonas de minifundio andino y, en particular, cafetero.

faltan presencia u obras públicas, maestros y policías, sino por dos circunstancias que se suman: una, que el orden jurídico tiende a ser difuso (no son claros los derechos y obligaciones surgidos de cada trato o contrato), y otra, que el Estado no garantiza el respeto imparcial y efectivo de esos tratos o contratos.

Dicha “ausencia de Estado” no estaría reducida a las zonas de frontera: para algunos analistas, en nuestro país predominaría un modo de vida altamente incierto, donde cada quien debe “negociar el orden” para cada situación (Uribe, 1997; Gómez, 1999; Garay, 1999); y sin duda en buena parte del “centro” —comenzando por los barrios marginados de las grandes ciudades— parecería imperar la ley de la selva. Hagamos entonces tres breves precisiones. Una, que en la frontera existe un orden peculiar y distinto del orden (o el desorden) del centro: tiene que ser así porque las realidades económicas y sociales que se trata de ordenar son peculiares de la frontera. Otra, que el conflicto armado está inva-

diendo más y más al “centro” —incluidos los barrios marginados—. Y otra, que aquí se trata de una cuestión de grado; en palabras de Jorge Orlando Melo, “[la frontera] es una prolongación entre corrupta y entusiasta de lo que es el resto de Colombia” (1990: 10).

La peculiaridad de las economías de frontera explica ciertas “instituciones” o prácticas diseñadas para asegurar claridad y cumplimiento de los contratos “en ausencia del Estado”. Por ejemplo: el “endeude” o anticipo de fondos al colono se garantiza con títulos sobre su tierra; los mineros se turnan para cocinar, pero el cocinero no participa en los hallazgos del día porque no los vio y así se evitan peleas; los vecinos se ayudan en tareas que exigen mucha mano de obra, pero el *gorrón* se queda sin ayuda; las autoridades decomisan droga al por menor porque pactar sobornos con traficantes dispersos es más difícil que hacerlo con los grandes; a los raspachines se les paga en basuco para atarlos al proveedor; la *dama* o compañera marital va “miti-miti”, pero la *guisa* o cocinera va a sueldo fijo¹.

A pesar del ingenio y la flexibilidad que muestran éstos y similares arreglos, en las zonas de frontera existe un déficit de coerción o autoridad que asegure la interpretación imparcial y el cumplimiento efectivo de los contratos. De lo primero resultan la conflictividad y la arbitrariedad; de lo segundo nace la tentación de hacer justicia por mano propia, o por mano de obra contratada. Por eso, las zonas de colonización son vulnerables a las prácticas de justicia privada o privatización de la justicia y al surgimiento de ejércitos irregulares. Estos ejércitos son “asociaciones privadas de protección” en el sentido de Nozick, o sea cuerpos que “sólo protegen a quienes pagan por ello, porque carecen del poder monopólico para anunciar que castigarán a quien haga uso de la fuerza sin autorización expresa, lo cual es condición necesaria para la existencia del Estado” (1974: 32).

Por parte de los de arriba, esta privatización de la fuerza puede consistir en el uso de jueces e inspectores de policía para despojar de sus tierras al colono que incumplió un

1. Ilustraciones o ampliaciones de estos ejemplos se encuentran en Alfredo Molano, en su orden: 1998, p. 67; 1996, p. 262; 1999, pp. 53-54; 1999, pp. 68-69 y 103; 1998, p. 66, véase referencias bibliográficas al final del capítulo.



Foto 1.2 Guerrilleros formados en la plaza de Cabrera, Cundinamarca, momentos antes de deponer las armas (30 de octubre de 1953).

contrato de “endeude” leonino; puede consistir en métodos como la “ley del llano” o la “ley de la chagra” cuando ganaderos y esmeralderos, respectivamente, se apoderaron del Departamento Administrativo Seguridad (das) y la policía rural en sus regiones (Barbosa, 1995); o puede consistir en la formación o importación de grupos paramilitares.

Por parte de los de abajo, la privatización de la fuerza se produce —de maneras más o menos inequívocas o “representativas”— a través del “bandillaje político” (Sánchez y Meertens, 1983), de las “autodefensas campesinas” y de las guerrillas revolucionarias, para citar tres expresiones colectivas.

B. Aparecen los actores

Después de las muchas guerras civiles que protagonizaron durante el siglo XIX, los dos partidos tradicionales tuvieron su última confrontación armada durante los años de “La Violencia” (1946 a 1965, aunque los autores difieren sobre ambas fechas), que ocasionó cerca de 180 mil muertes en un país de trece millones de habitantes. Aún hoy, La Violencia

es objeto de múltiples controversias (véase, por ejemplo, Sánchez y Peñaranda, 1991); pero a los efectos presentes bastará un resumen de los hechos mejor establecidos.

Las reformas políticas y sociales del liberalismo en los años 30 (intervencionismo, Estado laico, sindicatos, ley de tierras, etc.) intentaron modernizar el país e incorporar sectores de clase media, obreros y campesinos hasta entonces excluidos. Pero el cambio fue objeto de dura resistencia y de una “pausa” a partir del gobierno Santos (1938-1942). El Partido Liberal se divide en un ala moderada (Santos) y un ala populista radical (Gaitán), lo cual desemboca en la renuncia del presidente López (1944) y la elección del conservador Ospina en 1946.

El asesinato de Gaitán (1948) produce un estallido en Bogotá y otras ciudades, que no derroca al gobierno pero desencadena la violencia campesina en dos “márgenes cercanos”: i) En los llanos orientales, donde la guerrilla es más disciplinadamente liberal, y ii) en zonas de minifundio andino y, en particular, cafetero (Tolima grande, viejo Caldas). La polarización se agrava bajo Gómez, elegido con la abstención del liberalismo (1950) (Recuadro 1.1).

RECUADRO 1.1

Voces de emancipación

Alfredo Molano y Constanza Ramírez*

Mi abuelo materno se fue a vivir a Pasca después de la Guerra de los Mil Días. Era un hombre liberal, oriundo de Chipaque, al oriente de Cundinamarca, que nos contaba las hazañas de los ejércitos liberales. Se sentaba con nosotros, los que éramos niños, a contarnos lo que se sabía de esos tiempos. Había sido alférez de Uribe Uribe, era muy firme. El viejo repetía que los godos no habían ganado la guerra, sino que los liberales se habían entregado. Él fue de los que tuvo que ver con el levantamiento de los peones y jornaleros de la hacienda El Retiro en el Sumapaz; fue una de las personas que ayudó a que la gente levantara cabeza y se enfrentara a los propietarios, o sea a los presuntos dueños de esas tierras. De ahí surgió mi mamá como dirigente de La Colonia. Yo nací en el 30 en una parcela que nos dejaban trabajar los dueños de la Hacienda. Éramos diez hermanos, ocho hombres y dos mujeres. Vivíamos en una casa de dos piezas y una cocina.

Mis hermanos y yo empezamos a acompañar a mi mamá a las reuniones. Al principio se me hacían largas y no entendía bien lo que decían, aunque me gustaba mirar tanta gente junta. Eran reuniones grandes de 300, 400 personas, un día llegó a La Colonia el periódico de Erasmo Valencia, que se llamaba *Claridad*. Mi mamá nos lo hacía leer en alta voz por las noches y al otro día se iba a hablar con sus compañeros, a contarles las orientaciones que daba Erasmo Valencia. A resultas de las peleas que salían de esas reuniones, nuestra suerte mejoró un poco. Ya por lo menos teníamos tierras donde traba-

jar lo nuestro. La prueba fue que la gente comenzó a construir casa. Mi primer jornal se lo gané a un tío llamado Luis, hermano de mi mamá, por acejarle la yunta de bueyes. Después, más grande, empecé a trabajar con mi papá en la parcela que habíamos ganado peleando.

Juan de la Cruz llegó a Sumapaz, a Cabrera con su padre, don Dionisio, por allá en los años veinte. Llegaron por la falta de tierras en su tierra, Ráquira. Fue una migración por pobreza, la gente llegaba al Sumapaz a buscar como colonos otra vida. Eran tierras baldías y enmontadas. Don Dionisio estuvo también en la guerra de los Mil Días, fue corneta. Los Varela llegaron a la vereda de Pueblo Viejo, donde había una pelea con la familia Pardo Roche que pretendía ser dueña de todo aquello. Dicen que a raíz de una trifulca Juan de la Cruz se echó para los lados de Villarrica, y se afincó en una vereda llamada Mundo Nuevo. Juan de la Cruz, que era entendido y llevaba la semilla de la pelea por la tierra. Allí también se vivía muy miserablemente. Hizo un acta muy bien redactada y la gente se amañó mucho con él. Le dieron trabajo y parcela. Allí se volvió dirigente campesino, y hasta político, cuando la muerte de Gaitán nosotros estábamos trabajando en una arveja que teníamos en lo alto de la finca. A eso de las 2 pm sonó el cacho. Era un viernes. Nos pareció raro, pero recogimos la herramienta y paramos en la casa de la Junta Campesina. Allí supimos: habían matado a Gaitán. Nadie sabía qué hacer. Todos sabíamos, sí, que era grave, muy grave y que la tormenta

El fin de la violencia interpartidista se produce en tres fases. Primero, la amnistía de Rojas Pinilla (1953) que desmovilizó la guerrilla del llano. Luego, el Frente Nacional (pactado en 1957) que establece la paridad y la alternación entre los partidos, con lo cual se desmovilizan las restantes guerrillas liberales y las bandas conservadoras (“pájaros”). Después vienen unos años de transición hacia una violencia “social” y de descomposición hacia el bandolerismo,

que se prolonga hasta mediados del gobierno Valencia (1962-1966).

Eso en términos históricos. En términos analíticos, el hecho esencial es éste: La Violencia i) estalla y procede del centro geográfico y político, pero ii) se expresa y se perpetúa en la periferia campesina. En efecto:

a. La Violencia fue una disputa burocrática y también ideológica por el control del Estado entre los dos partidos ma-

se venía encima. Algunos colonos sacaron las escopetas que tenían guardadas desde la guerra, y todo mundo se puso a esperar la orden de Bogotá. Todo mundo estaba listo, pero como se trataba de volver a la guerra, todos necesitaban un general, una cabeza. Y esa cabeza se regaló, se vendió. Se llamaba Darío Echandía. Ospina la compró barato. De todos modos la cosa comenzó. Don Pablo Bello y don Pedro Acosta, que eran dirigentes venidos de Chaparral, de oír pelear al indio Quintín Lame, se echaron al monte a abrir camino por ahí con los recolectores de café. Erasmo Valencia había muerto a los pocos días de ser asesinado Gaitán, y los colonos habían nombrado a Juan de la Cruz en su reemplazo. Él tenía su gente por los lados de La Concepción en lo mas frío del páramo; se mantenía por allá y desde allá dirigía el movimiento que a su lucha por la tierra había sumado otra causa después del 9 de abril, la de la lucha por la vida. Así fue que un día el ejército nos atacó en La Concepción, que era la puerta de entrada al Sumapaz. Supimos defendernos porque teníamos buena información. Los soldaditos salieron mal librados. De La Concepción salimos con Juan de la Cruz para el Duda. La idea era luchar para derrocar a los conservadores, para tomarnos el poder. No alcanzamos a terminar nuestra tarea porque vino el acuerdo con Rojas Pinilla en Cabrera. Ese convenio de paz fue una pausa importante para reorganizarnos y coger más alientos, porque, a pesar de la paz, los problemas no se habían resuelto. Se organizaron varias marchas de huida para salvar a las familias. Des-

pués de los bombardeos y de la invasión militar a Villarrica y a Cunday, la gente que había peleado en el Sur del Tolima organizó las autodefensas en las regiones de Marquetalia y Riochiquito. Los comunistas eran muy activos, organizaban grupos de hombres, de mujeres y de niños, juntas veredales, comités de colonos y fundaban células de partido. Eran trabajos que se hacían al mismo tiempo que otros y que consistían en organizar la autodefensa campesina. Se sabía ya para dónde iban las cosas. Y no nos equivocamos. Salíamos a trabajar y a organizar a muchas regiones del Meta, del Huila, del Tolima, de Cundinamarca. Creábamos grupos como herramientas de nuestra lucha. La autodefensa era, de verdad, una defensa propia de la gente, de las comunidades; eran grupos que se movían dentro del campesinado sin identificarse.

La organización campesina de los años 30 fue, a la hora de la verdad, una escuela de comandantes guerrilleros. Muchos de los mandos de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayaquero salieron de esos primeros conflictos. Los golpes, las frustraciones, los engaños enseñan más que los libros y que las conferencias. Lo que se luchó en los años 20, vino a nacer en los 30, a volverse problema en los 40, y sangre desde 1950 para acá.

* Testimonio recogido por los autores. Tomado de Gerardo González. *Voces de emancipación*. Editado por Boaventura Souza dos Santos. Gerardo González es dirigente agrario, fundador de la Anuc y de Fensuagro. Hoy vive asilado en Europa.

yoritarios —cuyo clímax siguió al asesinato del líder de la oposición—, su escenario principal fue la capital de la República y su eventual solución sería un pacto entre los dos partidos.

b. Pero esa violencia “política” se nutrió, se superpuso y exacerbó la violencia “social” que bullía en el mundo campesino. Los conflictos agrarios alimentaron el estallido de 1948, los aparatos políticos luego se usaron para llevar la

“guerra” a las áreas rurales, y la mezcla entre lealtad partidista y conflicto agrario sirvió para escalar la violencia y al mismo tiempo alejarla de las grandes ciudades.

Y así, mientras las luchas sociales tomaban el camino de la violencia, la política se estaba retirando del conflicto. El levantamiento o, mejor, el desorden urbano fue contenido pocos días después del “Bogotazo”, las primeras guerrillas rurales fueron más defensivas que ofensivas, y la dirigencia

liberal rápidamente se distanció de “sus” tropas. Esta temprana bifurcación del conflicto —el “partidista” y el “social”— explica porqué el Frente Nacional, que fue su solución política, no fue bastante para extinguir la lucha armada en el campo. Y es en la periferia campesina donde la lucha armada va a reinventarse como el vehículo de la revolución socialista.

1. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, Farc-EP (o Farc)

La “reinención” se dio sobre todo en el caso de las Farc, fruto del encuentro entre la guerrilla campesina que no logró desmovilizar el Frente Nacional y el Partido Comunista (pc) que no encontraba espacio en el “centro” del sistema político. El proceso, en resumen, recorrió cinco momentos:

a. *El de luchas agrarias.* Los sindicatos y ligas campesinas que desde los años 20 venían actuando en regiones de Cundinamarca y Tolima se acercan al pc (creado en 1930) y se radicalizan en algunos sitios.

b. *El de autodefensas.* Al estallar La Violencia, aquellos movimientos campesinos crearon grupos armados que oscilan entre liberalismo y comunismo, y entre la defensa territorial estricta y ciertas incursiones de guerrilla móvil. Viotá (Cundinamarca) fue el ejemplo de “ciudad roja” o comunidad agraria organizada bajo inspiración comunista y con defensa territorial armada. En cambio, la inestabilidad prevalecía en el sur del Tolima: de allí partió la “Columna de marcha” (1950) que llegó al río Davis y creó el modelo de “colonización armada”. Los “limpios”, o ala liberal de esta guerrilla, aceptaron la amnistía de Rojas, pero el ala comunista (los “comunes”, bajo el mando de “Charro Negro” y “Manuel Marulanda”) persistió como autodefensa campesina.

c. *El de guerrilla.* En 1955 el ataque masivo del Ejército en Villarica (Tolima) causa el desplazamiento de colonos armados hacia Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, el Duda y el Ariari, donde crean las llamadas “repúblicas independientes” bajo influencia del pc. Aunque su “comunismo” fue más una forma de organizar la vida diaria, esta palabra, en pleno auge de la Guerra Fría, disparó las alarmas y escaló la respuesta militar. Durante varios años, sin embargo, el pc continuó viendo a las guerrillas como formas de resistencia campesina y no como un instrumento para la toma del poder (Recuadro 1.1).

d. *El de radicalización de la guerrilla.* Ya para el año 1961 el pc había declarado que “la vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación de todas las formas de lucha” (Vieira, 1967: 17). Con la violenta ocupación militar de Marquetalia (1964) y otras “repúblicas independientes”, la autodefensa acabó de convertirse en un ejército revolucionario: ese mismo año se constituye “el Bloque sur”, que en 1966 será rebautizado como Farc, bajo el anuncio de iniciar “una guerra prolongada por el poder” (Farc, 1966).

e. *El de radicalización de la izquierda.* Mientras las Farc se iban gestando en la periferia, el pc iba siendo excluido del sistema político. Tras apoyar la Revolución en Marcha y participar en los movimientos campesino y sindical de los 30 y los 40, el pc fue reprimido bajo La Violencia e ilegalizado a partir de 1954. El Frente Nacional prohibió la participación electoral y el acceso a cargos públicos de terceros partidos, de suerte que muchos cuadros urbanos del pc ingresaron a las Farc. La nueva visión política cuajó en la vii Conferencia (1982), cuando las Farc se declaran “Ejército Popular” al servicio de la revolución socialista: un proyecto de conquistar el centro del poder político que sin embargo actúa desde la periferia.

2. Otras guerrillas

Aunque las guerrillas distintas de las Farc son de origen más urbano, sólo han logrado mantenerse o prosperar en zonas rurales. Más aún, el origen urbano no significa que provengan del “centro” del sistema político sino, típicamente, de fracciones de izquierda sin mayor arraigo electoral o social. El grado y modos de “campesinización” varían de una a otra organización guerrillera, de suerte que aquí nos limitaremos a una relación muy abreviada.

- El Ejército de Liberación Nacional (eln) no nace como autodefensa campesina sino como una guerrilla decididamente revolucionaria. En 1964, inspirados en Cuba y en las teorías del Che, un grupo de activistas procedente del pc, de la izquierda liberal, de la teología de liberación y del sindicalismo, crea un “foco” guerrillero en zona rural de Santander. Pese a pugnas internas y ejecuciones sumarias, el foco logra asentarse, penetrar la lucha obrera (en petróleo sobre todo) y tener un momento de brillo con el sonado ingreso del padre Camilo Torres (1965).

Pero el eln no prosperó en las ciudades. En parte por doctrina, en parte por caudillismo y rencillas internas, en parte porque el Estado desbarata sus redes, en parte por reveses militares (como el de Anorí, en 1973, cuando quedó prácticamente eliminada), esta guerrilla siguió siendo campesina. Y la tendencia se acentúa desde la segunda mitad de los 70, cuando la presión militar y las necesidades de financiación concentran al eln en las zonas de bonanza (petróleo del Magdalena medio, Norte de Santander, Arauca y Casanare; banano de Urabá; oro del oriente antioqueño y el sur de Bolívar).

- El Ejército Popular de Liberación (epL) que fue importante en su tiempo, nació cuando el Pleno del partido comunista marxista-leninista ordenó el traslado de los cuadros directivos al campo. Creado en 1967 y desmovilizado en 1991, el epL de línea china logró penetrar el movimiento campesino y tuvo presencia significativa en regiones de Córdoba y Urabá.

- Tampoco, por supuesto, han logrado acceder al centro los pequeños grupos “foquistas” o “voluntaristas” que aún operan en Colombia: el Ejército Revolucionario del Pueblo (erp), el Ejército Revolucionario Guevarista (erg) y el remanente del epL.

- El contraejemplo de guerrilla no marginal fue por supuesto el Movimiento 19 de abril, (M-19). Tanto así que, mientras las Farc o el eln jamás han registrado más de 2 o 3 puntos, el M-19 llegó a tener 15% de favorabilidad en las encuestas. En su origen, fue más urbano que el eln. En 1970 a raíz de la dudosa derrota electoral del general Rojas, cuadros de la izquierda tradicional se sumaron a activistas de la Anapo —el movimiento populista/nacionalista del general— para “recuperar el poder” por las armas. Más que en acciones militares, el M-19 se especializó en golpes de opinión, que le fueron ganando cierta imagen de Robin Hood.

Pero la guerrilla urbana difícilmente podía prosperar en Colombia, dado el control policial sobre las ciudades. El M-19 opta entonces por la guerra rural, e inicia operaciones en el sur. El proyecto militar del M-19 no cuaja, primero por los golpes del ejército; segundo, porque choca con el poderoso cartel de Medellín y, tercero, porque los dirigentes perciben que tienen apoyo de la opinión y una excelente oportunidad política, siempre que renuncien a la violencia. Y así, el M-19 se desmoviliza en 1990. En las elecciones siguientes, para Asamblea Constituyente, su lista obtuvo el

primer lugar, con 27% de los votos; pero para entonces el movimiento ya había desaparecido como guerrilla.

3. Los paramilitares

Los irregulares en lucha contra la guerrilla prefieren llamarse “autodefensas”, mientras en el lenguaje ordinario es más común llamarlos “paramilitares”. Estos dos términos difieren en

que el primero apunta a un fenómeno espontáneo de autoprotección ciudadana ante la ausencia de Estado, mientras el segundo sugiere un cuerpo de combate paralelo a la Fuerzas Militares y en algún grado de connivencia con agentes del Estado. En la realidad colombiana se han dado mezclas de ambos fenómenos por lo cual —salvo donde el contexto indique lo contrario— en este Informe se usarán ambos apelativos indistintamente.

Los antecedentes del paramilitarismo se remontan al siglo xix y, en tiempos más recientes, a la ya mencionada “ley del llano”, a los “chulavitas” y “pájaros” de mediados del siglo xx, o a las autodefensas que, en la estrategia contrainsurgente de la Guerra Fría, tuvieron existencia legal y debatida a partir de 1965. Pero a comienzos de los 80 surge un paramilitarismo diferente, pues no es “autodefensa” ni tampoco “estatal”, sino extensión de los ejércitos privados que necesariamente tienen las industrias ilegales (narcotráfico y comercio de esmeraldas). Tras comprar grandes extensiones de tierra, aquellos “empresarios de la coacción” se empeñan en “limpiar de guerrilleros” el Magdalena medio, y su ejemplo es seguido por propietarios de Córdoba, Urabá y la Orinoquia. A partir de sus orígenes locales, algunos de estos grupos confluyeron —y así lo indica el nombre— en las Autodefensas Unidas de Colombia (auc). Pero se trata, en el mejor de los casos, de un proyecto nacional en construcción, de abajo hacia arriba, y sujeto a intensas tensiones internas. En otras palabras, aunque hayan adoptado un discurso “político” de alcance nacional, las autodefensas son respuestas locales a la guerrilla y, al igual que ella, pertenecen al mundo rural.

El proyecto militar del M-19 no cuaja, primero por los golpes del ejército; segundo, porque choca con el poderoso cartel de Medellín y, tercero, porque los dirigentes perciben que tienen apoyo de la opinión y una excelente oportunidad política, siempre que renuncien a la violencia.

C. El fracaso de la insurgencia

La marginalidad política y geográfica de la guerrilla se debe a una razón más importante que las ya sugeridas (control policial de las ciudades, canibalismo de la izquierda, falta de olfato político, etc.). La explicación fundamental es otra: en Colombia no existían ni existen las condiciones para que tenga éxito la insurgencia armada.

A partir, sobre todo, del trabajo pionero de Theda Skocpol, *States And Social Revolutions* (1979), puede decirse que hoy existe un núcleo duro de conocimiento acerca de por qué triunfan y cuando fracasan los intentos insurgentes. Aunque la intención final de los alzados en armas es hacer la “revolución” —“transformación rápida de las estructuras básicas del Estado y de las clases sociales” (Skocpol, 1979: 4)—, aquí entendemos por “triunfo” la condición previa y más modesta de derrocar las autoridades existentes y tomar control del aparato estatal.

¿Cuándo, entonces, llegan los insurgentes a tomarse el poder? Los estudios de historia comparada apuntan a un foco básico común, aunque difieren en matices o en énfasis que vale resumir porque hacen luz sobre el caso de Colombia:

a. La propia Skocpol acuñó la expresión “*revolutions are not made; they come*” (las revoluciones no se hacen sino que ocurren), para significar que no es la actuación de los rebeldes sino el contexto social y político quien decide la suerte del movimiento. Tras un cuidadoso examen de las revoluciones en Francia (1789), Rusia (1917) y China (1949), Skocpol concluye que la clave del triunfo insurgente fue el colapso del Estado *seguido* por masivos levantamientos campesinos. El colapso se dio bajo regímenes *absolutistas*, cuando la amenaza militar del extranjero impuso una presión fiscal que acabó por enfrenar a las clases altas con las élites políticas. El alzamiento popular tomó fuerza solo a raíz del colapso del Estado, y no se debió tanto al liderazgo revolucionario como a las condiciones previas de solidaridad y autonomía campesina.

b. Tras comparar experiencias que van desde la revolución inglesa de 1648 a la caída del comunismo en Europa del Este (1989), Richard Lachman subraya el hecho de que la movilización popular no tiene eficacia mientras sus diri-

gentes —“antiélites” — no logren una alianza con sectores significativos de la élite en conflicto “de vida o muerte” con otros sectores (1985; 1997).

c. Jeff Goodwin (1988) compara cuatro casos de Asia y otros cuatro de América Central, para concluir que los insurrectos triunfaron: i) cuando la metrópoli administraba directamente el país (Vietnam) en vez de cooptar a las élites nativas (Malasia, Indonesia y Filipinas), o ii) cuando existía un gobierno “sultanista”, una dictadura personal y caprichosa (Nicaragua), no una democracia o una dictadura impersonal y burocrática (Guatemala, El Salvador, Honduras).

d. En un trabajo posterior, Goodwin aclara por qué la dictadura excluyente es condición necesaria para el triunfo de los rebeldes; en breve, porque “agrava el malestar popular, bloquea el cambio pacífico, lleva a que los opositores se armen en defensa propia, hace creíbles las ideas radicales, impulsa la organización clandestina y debilita las fuerzas contrarrevolucionarias, incluyendo los mandos militares” (1997: 20-21).

e. En *Guerrillas y revolución en América Latina* (1992) Timothy Wickham-Crowley encuentra que el éxito insurgente depende de que exista una “mafiorracia” que haya perdido el apoyo militar de Estados Unidos, a la cual se enfrentan cuadros revolucionarios educados que consiguen apoyo campesino si entre éstos preexiste una “cultura de rebelión”.

f. Un poco a manera de resumen, John Foran (1997) compara 31 casos de éxito o fracaso revolucionario en el Tercer Mundo, a partir de cinco claves que encuentra en la literatura. Las tres primeras claves son estructurales, a saber: i)

La marginalidad política de la insurgencia se resume en el hecho de que sus candidatos —o el de organizaciones políticas de algún modo cercanas— hayan obtenido muy pocos votos en cuantas ocasiones optaron por someterse al veredicto popular.

que se trate de un país “dependiente” o subdesarrollado; ii) que su gobierno sea represivo, excluyente, personalista, y iii) que exista una sólida y eficaz cultura de resistencia política. Las otras dos claves son más coyunturales: iv) una severa recesión económica, y v) un “relajamiento” (*let-up*) del apoyo de Estados Unidos al gobierno.



Foto 1.3 **Juan de la Cruz Varela**, en una de las últimas fotos que le hicieron en vida.

Los cinco factores se encuentran en las revoluciones clásicas (México, Cuba, China, Nicaragua, Irán), en las anticolonias (Argelia, Vietnam, Angola, Mozambique, Zimbawe) y en las “revoluciones políticas” que no resultaron en “revolución social” (China en 1911, Bolivia, Filipinas y Haití). En El Salvador, Perú y Guatemala hubo alguna apertura política y apoyo firme de Estados Unidos al gobierno. En Chile (1970-1973) y en Jamaica (1972-1980) no había dictadura pero la izquierda triunfó en las urnas, no con las armas.

Así, si hubiera que expresarlo en una frase, se diría que la insurgencia en Colombia es periférica porque existe democracia. Una democracia “formal” si se quiere, pero una democracia arraigada y estable. Desde la creación de las Farc, se han producido diez elecciones presidenciales abiertas, han sesionado doce Congresos pluripartidistas y una Constituyente de origen popular, las autoridades locales pasaron a ser elegidas por la ciudadanía, se han sucedido cuatro elecciones de gobernadores y seis de alcaldes en todo el territorio, se adoptaron los mecanismos de la democracia directa

Es el contraste de Colombia. Una democracia electoral estable y pluralista al lado de un conflicto violento y persistente.

y se ha respetado —incluso ha aumentado— la separación de los poderes públicos.

La marginalidad política de la insurgencia se resume en el hecho de que sus candidatos —o el de organizaciones políticas de algún modo cercanas— hayan obtenido muy pocos votos en cuantas ocasiones optaron por someterse al veredicto popular. El pc tuvo un máximo de siete congresistas (dos senadores y cinco representantes) dentro de la coalición denominada Unión Nacional de Oposición (uno), en las elecciones de 1974. La Unión Patriótica (up) —el movimiento político auspiciado por las Farc en tiempos del gobierno Betancur— tuvo un máximo de nueve congresistas (tres senadores y seis representantes) en las elecciones de 1986, cuando alcanzó menos del 2% de los votos. Los movimientos que actúan como “brazo político” del eln no concurren a elecciones o tienen poquísima votación. Es más: según las encuestas de opinión a lo largo de los años, apenas dos o tres de cada cien colombianos sienten simpatía por la insurgencia y la inmensa mayoría la percibe como puramente criminal.

Es el contraste de Colombia. Una democracia electoral estable y pluralista al lado de un conflicto violento y persis-

tente. De un lado el centro, urbano y tan moderno como las otras urbes de América Latina, con un Congreso que delibera y unos jueces que juzgan. Del otro, la periferia de nuevas y no tan nuevas zonas de colonización, donde cohabitan los representantes elegidos del Estado y los actores armados contra él, las elecciones con los fusiles, la legalidad con la aventura y el sálvese quien pueda, el apremio y sin embargo la marginalidad de un proyecto revolucionario.

Y este contraste es esencial para entender el conflicto colombiano.

D. El fracaso del Estado

Pero si la insurgencia fracasó como proyecto revolucionario, el Estado fracasó porque fue incapaz de prevenir los alzamientos y ha sido incapaz de resolverlos en casi cuarenta años. Este fracaso se debe a que el conflicto también fue marginal o “periférico” para el Estado y para las élites, a que no lo abordaron del modo *prioritario, integral, concertado y sostenido* que exigían la *gravedad, complejidad, profundidad y persistencia* del problema. E igual que en el caso de la guerrilla, el fracaso del Estado obedece a razones estructurales más que a acciones u omisiones individuales de gobernantes o personas influyentes (Recuadro 1.2).

Colombia, en efecto, es una sociedad intensamente fragmentada. Por obra, en primer lugar, de una geografía que invita a la formación de provincias y que por mucho tiempo las mantuvo aisladas. Por obra, en segundo lugar, de un Estado históricamente débil, en términos fiscales, de capacidad reguladora y aún de monopolio de la fuerza. Por obra, en tercer lugar, de una tardía, lenta e insuficiente extensión de la ciudadanía social o incorporación de las mayorías populares. Y por obra, en cuarto lugar, de unas élites sin suficiente base social, fragmentadas y —por ende— sin conciencia de que su papel es dirigir una nación. Estos cuatro factores —geografía, Estado débil, no inclusión, no “clase dirigente”— se conectan y alimentan entre sí para producir una sociedad diversificada, heterogénea, vital y pluralista, pero también propensa al conflicto, al bloqueo y a la incapacidad de resolver problemas colectivos.

Cada uno a su manera, otros países de América Latina comparten los rasgos anteriores; pero su intensidad y su

RECUADRO 1.2

Un país sin clase gobernante

Marco Palacios*

Cruzados apenas los umbrales del siglo xxi conviene insistir en cierta excepcionalidad colombiana en el ámbito latinoamericano. A saber, que las clases gobernantes y dirigentes de la “república oligárquica” nunca sufrieron derrota y, por tanto, su experiencia y sensibilidad políticas son bastante limitadas en eso de ponerse “en plan de iguales”. Esto les ha impedido dialogar y conciliar abiertamente con las clases populares y con sus diversas organizaciones. Defienden en principio y a ultranza un Estado fiscalmente débil.

Ni revoluciones como las de México, Bolivia o Cuba; ni dictaduras tradicionales al estilo de las del Caribe o Venezuela o burocrático-modernizadoras como las del Cono sur; ni populismos blandos como los de Velasco Ibarra en Ecuador; ni duros como los de Vargas y Perón en Brasil y Argentina; ni golpes militares reformistas como los de Perú o Panamá en la década de 1970; ni guerras civiles como la costarricense de 1949, con final liberal y de potencial democrático; nada de eso ha roto con la continuidad de dominio y gobernación de unas clases que, colocadas al borde del abismo por sus propias pugnas, como ocurrió en el segundo semestre de 1949, optaron por el compromiso, dejando al pueblo campesino sumido en el sectarismo y lo que venimos llamando La Violencia. Este cerramiento oligárquico resta legitimidad democrática al Estado colombiano. Pero también le resta eficacia en cuanto instituciones clave para el orden, como son un poder judicial independiente y su soporte, una policía moderna, quedaron desbordados por la urbanización caótica, la acelerada mundialización del crimen organizado con sus múltiples expresiones y secuelas domésticas, de las cuales el narcotráfico ha sido la más gravosa.

Detengámonos un momento en esta trayectoria del siglo xx colombiano. De 1903 a 1948 se apunta hacia la construcción de un modelo de civilidad mediante la representación política de todos los intereses sociales (los intereses popula-

res urbanos y rurales fueron asumidos por dirigentes y corrientes del Partido Liberal, de los cuales la izquierda, encarnada principalmente por Gaitán y el gaitanismo, fue quizás su expresión más poderosa), sobre una base fiscal fuerte, como empezó a plantearse y ejecutarse en la reforma tributaria de 1935. En 1948-1949 empezó a desarmarse este modelo. Las clases capitalistas y rentistas, así como la política que controlaba los dos partidos históricos, quedaron sobrerrepresentados en el Estado y en un comienzo se acomodaron a la dictadura militar (1953-1958).

Importándoles fundamentalmente que el Estado tuviese baja capacidad fiscal extractiva, independientemente de si había o no déficit en las cuentas de la hacienda pública, se pasó a las clases populares *la caja de galletas*.

En efecto, a partir del Frente Nacional (1958-1974) la política social empezó a funcionar como una *caja de galletas* administrada por los políticos profesionales, cada vez más incontrolables, quienes dispensaban la provisión de educación, casa-lote, electricidad, acueductos, vacunas. Paliativos a la pobreza urbana y rural que sirvieron al sistema político para crear y mantener clientelas en barrios y veredas que darían fluidez a un mercado electoral competitivo en apariencia, pero de hecho circunscrito a los partidos Liberal y Conservador y a sus múltiples facciones, movimientos y grupos que jugaban en la arena electoral de lado del gobierno de turno.

Así registramos modestos programas asistenciales que comenzaron a surgir en los comienzos del Frente Nacional como las juntas de acción comunal y las brigadas cívico-militares. Terminaron entretejiéndose a las redes remozadas de clientelismo electoral sobre las que pudieron montarse organizaciones y burocracias como las del Plan Nacional de Rehabilitación a mediados de la década de 1980. En este sentido, los pactos entre los gobiernos y las guerrillas en 1990-1991 y 1994 también estuvieron orientados por una concepción instrumental de la vida política. La *caja de galletas* fue el medio expedito de cooptar guerrilleros y ganar tiempo en cier-

* Historiador. Rector de la Universidad Nacional.

tas regiones o micro-regiones del país. Para los jefes guerrilleros que negociaron la desmovilización de sus fuerzas fue un medio de legitimación y control internos.

El continuismo colombiano genera en las clases dirigentes y en las medias prósperas una mentalidad excluyente, de *neo-apartheid*, que encuentra su razón de ser en la exclusión y segregación implícitas en el modelo de economía política. Se supone entonces que la exclusión de los sectores populares, rurales y urbanos de los bienes de la modernidad económica y de la ciudadanía puede paliarse administrando a cuenta gotas y desde arriba. Sobre todo después del 9 de abril de 1948 cualquier manifestación de protesta desde abajo ha sido vista con desconfianza, llegando a inspirar miedo en las clases gobernantes y la respuesta inicial suele ser de tipo policivo, penal, militar.

En el proceso de modernización colombiano se rompieron los lazos premodernos de solidaridad entre clases, pero aquí no fueron reemplazados por los vínculos igualitarios de la ciudadanía política. La alternativa ofrecida por nuestra república oligárquica ha sido de partida doble: de un lado, el clientelismo electoral modernizado y, del otro, el funcionamiento de lo que el sociólogo y economista Wilfredo Pareto denominó la circulación de élites. El funcionamiento del proceso electoral exige reconocer, valorar y emplear el talento político individual, ese bien escaso en las sociedades, sin tener en cuenta el origen social de sus portadores.

La geografía de guerrillas, paramilitares, cultivos ilícitos, rutas del contrabando, es la geografía de la colonización de la segunda mitad del siglo xx. La extraordinaria historia de las colonizaciones de este país, colonizador por excelencia, es la historia de millones de vidas que han buscado rehacerse en condiciones económicas y sociales adversas, quizás menos opresivas aunque menos solidarias que las de sus comunidades campesinas de origen. Por eso no debiera sorprender que guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas hayan encontrado respaldo en las poblaciones de colonos individualistas cuya atomización es más acusada si consideramos que en la frontera agraria la gente proviene de todos los rincones del país; sin olvidar, además, el aspecto que se refiere a la baja institucionalidad que caracteriza la adjudicación de

los derechos de propiedad en las zonas de colonización, a la violencia cotidiana y a la ausencia de autoridad.

Por último, enfrentamos la peculiar dinámica social que desencadena el conflicto armado. Los que parecían meros residuos del viejo patriarcalismo y de la cultura política binaria dicotómica, omnipresente en La Violencia, vuelven a ganar centralidad. La guerra irregular termina imponiendo una lógica del terror sobre la población civil, que tiene una salida espeluznante en las corrientes de desplazados. Aquí se corroen los precarios tejidos sociales y los tenues lazos entre autoridad y población. Al punto que los campesinos no siempre consiguen distinguir por el uniforme quién es soldado, guerrillero o paramilitar. “Uno no los ve, dice un campesino, porque uno desde que oye decir que viene un grupo de paramilitares, o que viene una tropa de ejército o lo que sea, uno no espera para mirar. Porque uno no tiene la seguridad de si vienen a conversar con uno o si vienen es a matarlo”^{**}.

En suma, y volviendo al inicio, lo que diferencia a nuestro país de otros latinoamericanos no es la exclusión como tal, o la inseguridad ciudadana en las grandes ciudades y en los campos, o la desigualdad social creciente, sino la ausencia de una clase dirigente capaz de gobernar el Estado, de tramitar los procesos complejos de construcción de ciudadanía y de dar curso al sentimiento de que todos somos colombianos.

^{**} María Victoria Uribe, 1998, “Entre la parodia y el simulacro. Interacciones entre ejército, guerrilla y paramilitares en Colombia”, ponencia presentada en el Seminario internacional Violencia Política, Desplazamiento Forzado y Alternativas de Paz en Colombia, ICAN, Bogotá, agosto 10 al 13.

presencia simultánea en mucho explicarían la singularidad del “caso” colombiano con sus grandes defectos y sus virtudes históricas. La virtud de ser una democracia estable en medio de frecuentes dictaduras (porque el poder en Colombia está muy fragmentado), la virtud de un crecimiento económico modesto pero sostenido (porque el país cuenta con muchos “motores” alternativos) y la virtud de una rica diversidad regional y cultural. El defecto de una exclusión y una desigualdad social muy intensas, el del fácil recurso a la ilegalidad (incluyendo —¡de qué modo!— el narcotráfico) y, claro está, el de la propensión a la violencia política y social.

Este Informe no es lugar para presentar la prolija sustentación empírica que piden los asertos anteriores². Pero vale ahondar un poco sobre la idea central: la fragmentación y recortada visión de las élites colombianas. Como en el caso de la revolución, hay un cierto núcleo duro de saber acerca del asunto, núcleo que está bien expresado en un texto clásico de Charles Tilly: “La formación de los estados nacionales no fue una experiencia de élites modernizantes que articularan las demandas de las masas y se enfrentaran a los titulares tradicionales del poder para satisfacer esas demandas. Lejos de ello. Nuestro estudio (que reunió a ocho gurúes de la sociología histórica) descubrió un mundo donde pequeños grupos de hombres hambrientos de poder lucharon contra muchos rivales en la búsqueda de sus propios fines, e inadvertidamente promovieron la formación del Estado nacional y la inclusión gradual de los sectores populares” (1975: 635). En efecto: los derechos políticos, económicos y sociales no se extienden de manera gratuita; son contraprestaciones que ofrecen sectores emergentes de la élite a cambio de apoyo para derrotar el poder establecido; y este proceso de ampliación de la ciudadanía avanza hasta tener una sociedad incluyente y unas élites que por propio interés, “piensan en todos”.

A la inversa, en el caso colombiano, la fractura regional y el Estado débil (o sea sin mucho que ofrecer) se sumaron a la fragmentación del movimiento popular y a los mecanismos verticales, segmentarios o personalistas de control social (la encomienda, la hacienda, el clientelismo, la “palanca”, etc.) para frenar en un nivel comparativamente bajo el

proceso *colectivo* de inclusión o extensión de la ciudadanía. En cambio habría movilidad o ascenso *individual*, de suerte que personas de distinto origen ingresan a las élites económicas o políticas por métodos legales o —cómo no— ilegales; y así, más que una “clase dirigente”, tenemos una serie de élites inconexas, personas que “sólo tienen en común el club” (Deas, 2002).

Hagamos aquí una pausa para atar algunos cabos. Igual, digamos, que Brasil, Perú, Bolivia o Venezuela —aunque quizá más que ellos— Colombia tiene una historia de colonos y fronteras donde pueden anidar ejércitos no estatales; pero en el país no hubo o fue más débil el “momento populista” (digamos, el de Getulio Vargas en Brasil, el de Velasco Alvarado en Perú, el de la revolución boliviana de 1952 o el del *boom* petrolero en Venezuela). De hecho, valdría decir que el momento López Pumarejo-Gaitán fue el último intento de inclusión masiva; la violencia social, que de uno u otro modo venía crujiendo desde los años 20, reventó al detenerse la Revolución en Marcha y rápidamente se desvió a La Violencia. Y en este punto entronca la guerrilla actual con su fracaso como proyecto revolucionario, como entronca la continuada incapacidad del Estado y de las élites colombianas para encontrar la salida del conflicto. En términos analíticos, diríamos que la geografía fue una condición necesaria, el frenazo al proceso de inclusión social fue el precipitante, La Violencia fue el inicio y la desarticulación de las élites el sostén de un conflicto tan excepcionalmente complejo y prolongado.

En términos más específicos, aunque breves por necesidad, se podrían enunciar ocho vínculos negativos entre la conformación-orientación de las élites y la evolución del conflicto armado en Colombia:

a. *Falta de perspectiva*. Unas élites que comprensiblemente invierten la energía en avanzar su carrera personal —puesto que los proyectos colectivos son tan débiles— tienden por eso mismo a no ver el conjunto y a ser cortoplacistas. De hecho, durante mucho años la “clase dirigente” no vio el conflicto armado sino una matazón lejana de campesinos embrutecidos por el sectarismo; y cuando, como se dirá en el Capítulo 4, el conflicto golpeó al centro del sistema políti-

2. Las ideas anteriores, igual que los comentarios sobre el sistema político colombiano a lo largo del capítulo, se desarrollan en un trabajo de Hernando Gómez Buendía, *Colombia y su encrucijada*, Colciencias/ Universidad del Rosario (en preparación).

co, la dirigencia empezó a ensayar fórmulas simplistas, improvisadas y ciclotímicas, un gobierno le apuesta a la paz negociada pronta y fácil, y el que sigue a un triunfo militar fácil y pronto, o viceversa. Por no apreciar las distintas facetas del problema, se usan remedios parciales o sesgados; por no poder mirar más allá del cuatrienio, falta política de Estado y sobran activismos de gobierno.

La falta de perspectiva fue especialmente dañosa en los momentos que marcaron puntos de inflexión en el conflicto. Así ocurrió en el tránsito de la autodefensa campesina a la guerrilla comunista: antes que pedir la revolución, los colonos de la época reclamaban *más presencia* del Estado (acceso al mercado, titularización, etc.); y así, lo que hubiera podido resolverse con una buena gestión agraria, acabó siendo una insurgencia comunista en pleno auge de la Guerra Fría (Recuadro 1.3). O así ocurrió con la escalada del conflicto durante los 90, que ante todo obedece al narcotráfico: pues los dos males ya eran obvios y graves durante los 80 pero no se hizo nada para evitar el contagio claramente previsible.

b. *Débil sentido de lo público.* Mucho se ha escrito sobre el predominio de intereses particulares en la política y en la esfera pública, pero quizá un *graffiti* logró sintetizarlo: “el sector público es el sector privado de los políticos”. Para añadir otra exageración: quizá porque la democracia electoral en un país con pobreza extendida implica clientelismo, el sistema político colombiano es altamente clientelista. Esto a su vez implica que los políticos no se dediquen en realidad a la política —es decir, a representar fuerzas sociales alternativas y a darle rumbos alternativos al país—; se dedican más bien a administrar empresas electorales. Tales empresas consisten —en otra caricatura— en repartir favores entre los votantes (“clientelismo”), repartir puestos entre los activistas (“patrimonialismo”) y repartir contratos o licitaciones entre los financistas (“mercantilismo”).

Semejante manera de “hacer política” incide sobre el conflicto al menos en tres vías. Por la de la exclusión: dado su alto costo unitario, el clientelismo deja por fuera del sistema político a mucha gente, tal vez también a muchos rebeldes potenciales. Por la de no convocar: al trivializar la política y sus discursos, el clientelismo cierra el paso a ideólogos y fuerzas sociales cohesionadas. Y por la vía de la corrupción; la mezcla de mercantilismo para los de arriba, patrimonialismo para los del medio y clientelismo para los de abajo masifica la cultura de apropiación privada de lo

público, que por un lado distrae recursos muy cuantiosos del gasto social, por otro deslegitima el sistema político y aún, por otro, da un pretexto a la acción de los violentos.

c. *Desentendimiento.* La fragmentación de las élites crea la idea en cada subsector de que otro está haciendo las cosas o debería estarlo; y esto refuerza la tendencia natural a evadir los costos de los llamados “bienes públicos”, que uno puede disfrutar aunque no pague. El prototipo de tales bienes es la seguridad ciudadana, y la muestra más clara del desentendimiento de las élites es la escasez de jóvenes de clase alta en las Fuerzas Armadas: el problema no es de ellos sino de alguien anónimo que deberá morir por defenderlos. Es más: aunque achaquen todos sus males al conflicto y aunque exigen que el Estado lo cure de raíz, las élites colombianas son bastante remisas a apechar con el costo: la evasión del impuesto a la renta llega a 33% del recaudo (Misión del Ingreso Público, 2002: 15) y la carga tributaria vale apenas 11,6% del pib. En promedio la carga tributaria en países de alto desarrollo humano es del 22,3% (pnud, 2000), y la de algunos países en conflicto, actual o reciente, es como sigue: Israel (49,9%), Sri Lanka (16,2%), Sierra Leona (10,2%), Perú (14%), Albania (16,6%), Croacia (42,85%), Azerbaiyán (18,2%), Malasia (18,9%), Filipinas (17%), Indonesia (15,6%). (Banco Mundial, 2000; undp, 2000).

d. *Inclusión limitada.* La relación entre violencia y desigualdad social es bastante compleja y controvertida. Por un lado, son muchas las sociedades con altos índices de iniquidad, exclusión o pobreza donde no se da conflicto armado; pero por otro lado en los países prósperos e igualitarios no suelen darse guerras civiles —y en este sentido se diría que la desigualdad es una condición necesaria pero no suficiente de la guerra interna (Gutiérrez, 2001). No es exacto pues decir que “la violencia en Colombia se debe a la pobreza” o a la “injusticia social”; pero tampoco es exacto decir que “la guerrilla no tiene que ver con la miseria”. En los capítulos 2 y 15 se ahondará en esta relación; en este punto, sin embargo, ha de notarse que aquella falta de incorporación de los sectores populares conecta el tema de las élites con el conflicto armado. Y además de la exclusión o la pobreza —que Colombia comparte con países vecinos donde no hay guerra—, éstas tendrían aquí dos caracteres que ayudan a la violencia; uno es la falta de los referentes simbólicos originados en procesos de movilización e incorporación popular masiva (la “ideología de la revolución” en México, Bolivia o Cuba,

RECUADRO 1.3

Queremos una paz sin hambre y sin represión

Manuel Marulanda Vélez*

Huyendo de la represión oficial nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia (Tolima), donde el Estado nos expropió fincas, ganado, cerdos y aves de corral, extendiendo esta medida a los miles de compatriotas que no compartían la política bipartidista del Frente Nacional.

El Congreso facultó al presidente y a los altos mandos militares para que nos pasaran la cuenta de cobro por haber enfrentado las dictaduras de Laureano Gómez y del general Rojas Pinilla, a pesar de haber sido nosotros amnistiados e indultados por una ley del Parlamento.

Esperamos ocho años para conocer los resultados, incluida la indemnización de quienes perdieron todo en los departamentos de Tolima, Huila, Cauca, Valle y Caldas. Los tres poderes nunca hicieron nada para materializar los acuerdos y menos aún para aclimatar la paz.

En 1964, a raíz del triunfo de la revolución cubana, el presidente Kennedy diseñó un plan contrainsurgente para América Latina, con el fin de evitar el surgimiento de otras revoluciones en el continente; a estas medidas diseñadas por el Pentágono se les dio el nombre del Plan Lasso, y es dentro de este marco cuando el presidente Guillermo León Valencia le declara la guerra a 48 campesinos de la región de Marquetalia, dirigidos por Manuel Marulanda Vélez.

Ante la inminencia de la agresión gubernamental, estos 48 hombres se dirigieron al propio presidente, al Congreso, a los gobernadores, a la Cruz Roja Nacional e Internacional, a la Iglesia, a las Naciones Unidas, a los intelectuales franceses y demás organizaciones democráticas, para que impidieran el comienzo de una nueva confrontación armada en Colombia con imprevisibles consecuencias. Desdichadamente nadie nos escuchó, salvo la Iglesia, ya que comisionó al sacerdote Cami-

lo Torres Restrepo para que se entrevistara con nosotros, pero los altos mandos militares se lo impidieron. A los pocos días empezó el gigantesco operativo con 16 mil hombres del ejército que utilizaron toda clase de armas, incluso bombas bacteriológicas lanzadas por aviones piloteados por expertos militares gringos, y sólo ahora, después de 34 años de permanente conformación armada, los poderes y la sociedad comienzan a darse cuenta de las graves consecuencias del ataque a Marquetalia.

En aquel entonces, esos 48 campesinos solamente exigían la construcción de vías de penetración para sacar sus productos agrícolas, un centro de mercadeo y unas escuelas para educar a sus hijos, lo que implicaba del Estado una inversión no superior a cinco millones de pesos.

En diciembre de 1990, con el ataque a Casa Verde, mediante bombardeos y ametrallamientos... el señor César Gaviria aniquila toda posibilidad de diálogos encaminados a montar la paz. Con esta nueva agresión el Ejército oficial se apodera de 300 mulas, 70 caballos de silla, 1.500 cabezas de ganado, 40 cerdos, 250 aves de corral, 50 toneladas de comida, destruye puentes de la comunidad, arrasa con las sementeras y quema casas para demostrar el poderío del Estado a través de la fuerza pública. De la misma manera procedieron en 1965 en las regiones de El Pato (Caquetá), Guayabero (Meta), y Riochiquito (Cauca).

* Extractos del mensaje de Manuel Marulanda Vélez, máximo comandante de las Farc-EP, leído por Joaquín Gómez, durante la instalación de las mesas de diálogo, en San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999.

por ejemplo); otro sería el gradualismo de los avances sociales en Colombia, con la creencia asociada de que uno avanzó por mérito individual y no por apertura del sistema.

e. *Maltrato de “la otra Colombia”*. La dispersión y falta de “sentido nacional” de las élites conlleva un tratamiento

aún más inadecuado del país periférico. Por una parte, las élites perciben a esa “otra Colombia” (las zonas de colonización, las minorías étnicas, etc.) como un mundo raro, primitivo, inferior y amenazante que nos llenó de problemas y que debe someterse a disciplina (García, 2003). Por otra la

someten a un régimen de “colonia interna”, sujeta a la voracidad de terratenientes, comerciantes y funcionarios venales que extraen el excedente y lo trasladan a la “metrópoli” (Bogotá, la capital del departamento, la ciudad-*boom* de la zona). Este mixto de desprecio y rebatiña inspira por supuesto estrategias erradas y acciones contraindicadas en los territorios más sensibles al conflicto.

f. *Degradación de poderes regionales.* La privatización del Estado tiende a ser mayor en la región que en la nación y es especialmente intensa en ciertas zonas. Bajo el régimen de hacienda que a su tiempo predominó en los Andes, en el Caribe y en la Orinoquia surgió un “capitalismo de familia” con influencia o control simultáneo sobre la tierra, el aparato electoral, la administración local, la justicia y los cuerpos de seguridad. Este arreglo tradicional —que además fue común a varios países latinoamericanos— perdió sus tintes, digamos, “paternalistas”, a medida que las tierras pasaban a manos de narcotraficantes y jefes guerrilleros o paramilitares. Las élites nacionales, dispersas, distraídas o cómplices, no le pusieron coto a este proceso que habría de entregar varias regiones de Colombia al maridaje entre señores de la guerra y autoridades locales, con el uso creciente de la fuerza para fines privados y la penetración mafiosa del sistema político (partidos y Congreso) de abajo para arriba o de la “periferia” al “centro”.

g. *Élites y paramilitares.* Más que por una ciudadanía universal y vigorosa, podría decirse que la democracia colombiana existe “por empate”: ningún sector de la élite logra imponerse sobre el resto. Esto corresponde al carácter transaccional y gradualista que a menudo se aplaude a nuestra vida política (Posada, 1998), pero igual corresponde a la heterogeneidad del bloque de poder y de las coaliciones de gobierno. En estas circunstancias la extrema derecha, igual que otros segmentos de la élite, tiene unos espacios y unos modos de influir sobre determinadas instancias del gobierno central, las corporaciones públicas, el aparato judicial, las administraciones locales, los gremios, los medios de comunicación y la opinión pública nacional e internacional.

Comoquiera que sea, los “halcones” dispuestos a financiar o promover la guerra sucia son una minoría dentro de la élite y por eso no es válido afirmar, como lo hace la guerrilla, que el paramilitarismo en Colombia sea “una política de

Estado”. Pero esto para nada niega que ciertos funcionarios, algunos mandos militares, determinados políticos e incluso grandes empresarios —lo admite Carlos Castaño (2001: 115-118)— patrocinen o cohonesten con la actuación de grupos paramilitares. Los apoyos de arriba ayudan a explicar porqué las autodefensas regionales logran cierto grado de articulación y visibilidad nacional, o por qué el paramilitarismo creció en respuesta a los diálogos de paz con la guerrilla y a los intentos de reforma o apertura del sistema de los últimos veinte años (Romero, 2003).

h. *Militar y no político.* Al interior del aparato estatal, la democracia por empate se plasma en el “pacto de reparto” o régimen de “compartimentos estancos”, que consiste en entregar cada esfera de gestión (la política económica, la administración de justicia, la política social, las relaciones exteriores, etc.) al sector interesado de la élite para que la admi-

Aunque achaquen todos sus males al conflicto y aunque exigen que el Estado lo cure de raíz, las élites colombianas son bastante remisas a apechar con el costo: la evasión del impuesto a la renta llega a 33% del recaudo.

nistre en forma autónoma. Este mecanismo operó también respecto del conflicto, cuyo manejo fue entregado a las Fuerzas Armadas y su círculo —con una implicación importantísima: el conflicto entendido como problema militar, y no como el asunto esencial de la política.

Se dijo, en efecto, que inicialmente La Violencia fue un conflicto entre los dos partidos tradicionales. Es pues comprensible que, tras pactar la rotación y el reparto pacífico del poder entre liberales y conservadores, los dirigentes del Frente Nacional pensaran que el problema político detrás de la violencia ya estaba resuelto, y que sus remanentes eran el bandidaje y la delincuencia rural que suelen darse tras una “guerra civil” en cualquier lugar del mundo. A partir pues de 1957, y de manera casi invariable, el Estado ha entendido la insurgencia como un problema de “orden público” —más propiamente, de “desorden público”. Esta lectura era altamente compatible con otro pacto implícito del Frente Nacional: los militares devolvían el poder (que ejercían desde el golpe de Rojas en 1953) y se retiraban de la política a cambio de no ser sometidos a juicio por sus actuaciones bajo la dictadura y de mantener jurisdicción exclusiva sobre las cuestiones de “orden público”.

La guerra como un problema puramente militar, sin conducción política. Medio país —el centro— en relativa paz, haciendo *business* —y, más notable, *politics*— *as usual*. El otro medio país —la periferia— confiado a las Fuerzas Armadas para que impusieran el orden.

Pero este arreglo cómodo para la “clase dirigente” tenía el doble defecto de ignorar las dimensiones extramilitares del conflicto y de quitar eficacia a la acción militar. La “exclusividad” a las Fuerzas Armadas para atender el conflicto reforzó su tendencia a ser un *ghetto*, debilitó el control civil, agravó las suspicacias recíprocas, las aisló del medio donde debían triunfar, las hizo sentir abandonadas por la opinión y el “establecimiento”, las acercó de rebote a la derecha política, las hizo más sensibles al influjo directo de Estados Unidos y sus prioridades, redujo su motivación de lucha, toleró su burocratización³ y le dio cabida a la corrupción⁴.

Esta visión del conflicto como un asunto criminal y periférico se mantuvo intacta durante mucho tiempo y aún predomina en la actitud del Estado y las élites. En efecto, durante 25 años no se ensayó sino la acción armada para eliminar a los “bandoleros” (no se hablaba de “guerrilleros”) y apenas en 1982 el presidente Betancur admitió que la guerra no se debía sólo a “causas subjetivas” sino que había “causas objetivas”. El gobierno siguiente impulsó el Plan Nacional de Rehabilitación (pnr) para atender los municipios en zonas de violencia; y Andrés Pastrana llamó a su Plan de Desarrollo *Cambio para Construir la Paz* en reconocimiento de que la guerra debería ser tema central de las políticas públicas.

Pero, además de tardío, el reconocimiento ha sido parcial y más bien retórico. Y esta no politicidad del conflicto se confirma, a los ojos del Estado y las élites, en tanto la insurgencia carece de simpatía o apoyo masivo, en tanto no plantea la amenaza de un alzamiento popular, en tanto —para insistir— la guerrilla es marginal al sistema político.

La guerrilla entonces se fue quedando al margen de la política y los políticos se fueron desentendiendo de la guerrilla. El resultado ha sido agrandar la distancia entre dos mundos y dos modos de pensar, de modo tal que el diálogo

eventual entre uno y otro parecerá un encuentro cuando es un desencuentro. Por eso en El Caguán bajo Pastrana, y antes en Caracas-Tlaxcala bajo Gaviria, y antes en La Uribe bajo Betancur, se sucedieron largas conversaciones de sordos.

El conflicto no ha sido tratado siempre o exclusivamente como asunto de “orden público”. En los nueve procesos de desmovilización exitosos del período Barco-Gaviria se acordaron garantías políticas y ayudas de reinserción. Después de 1964 se han expedido tres leyes de amnistía, se ha extendido el indulto en cinco oportunidades y se han concedido 153 rebajas de penas. Entre 1980 y 1998, cada presidente inició diálogos con la Farc o el eln, y su consiguiente “estatus político” fue formalizado por cuatro de ellos (Betancur, Gaviria, Samper, Pastrana).

Pero ninguna guerrilla —desmovilizada o existente— ha logrado imponer o negociar reformas substantivas; y ningún presidente, candidato o directorio político ha planteado claramente las reformas “objetivas” que estaría dispuesto a convenir con la insurgencia. Pese a que está destruyendo el país, la guerra no ha entrado aún a la política.

E. Y sin embargo

La interpretación del conflicto aquí propuesta podría prestarse a tres malentendidos que conviene despejar desde un principio. Primero: ni su carácter esencialmente campesino en un país predominantemente urbano, ni su falta de apoyo masivo significan que los grupos armados carezcan de proyectos políticos. Segundo: el hecho de que el Estado no haya podido resolver el conflicto no significa que hayan faltado los esfuerzos y los logros. Tercero: que el conflicto se asiente en la “periferia” geográfica y política, no significa que el “centro” deje de ser la fuente, el objetivo y, cada día más, el escenario, del mismo. Veamos.

I. Proyectos políticos

Las guerrillas colombianas, sin excepción, han adoptado un programa político, se han aliado y dividido por creencias

3. Aunque la situación ha comenzado a cambiar bajo el Presidente Uribe, en las Fuerzas Armadas colombianas hay seis funcionarios administrativos por cada operativo, cuando en Estados Unidos la proporción es de uno a tres (Richani, 2002: 46).

4. Aunque no existen datos agregados sobre el particular, son frecuentes los episodios de corrupción entre oficiales, tropa o civiles adscritos que denuncia la prensa; el efecto de estas prácticas sobre las filas y sobre la moral de combate es por supuesto desastroso.



Foto 1.4 **Columna de Villarrica.** Pacto de Paz en Cabrera, Cundinamarca, 1953.

políticas, han hecho proselitismo y “trabajo de base”, han creado o contado con un movimiento político desarmado, han participado en diálogos y acuerdos con autoridades nacionales o locales y con organizaciones políticas diversas. Es más: sus militantes o, en todo caso, sus dirigentes se autodefinen como revolucionarios, y este sólo hecho importa porque la idea que cada quien tiene de sí mismo —verdadera o falsa, justa o injusta— influye en forma decisiva sobre sus actuaciones.

De manera por demás esquemática, se podría hablar de tres momentos en la ideología de las Farc, advirtiendo que cada uno deja ecos en el siguiente y que se trata de “acentos” dentro de un discurso bastante monolítico:

a. El agrarismo radical, que se mantuvo hasta los 60 y que pedía garantías políticas, indemnización para los campesinos desplazados, reforma agraria e inversión pública en el campo

b. El marxismo-leninismo línea urss, que dominó hasta comienzos de los 90, en una versión acartonada y militarista para la cual “el poder nace del fusil”.

c. El bolivarianismo, que se acentúa tras la caída de la urss, donde reviven y se actualizan ciertas ideas gruesas del Libertador (latinoamericanismo, antiimperialismo, militarismo, intervencionismo económico, etc.).

No menos, a su propia manera, el discurso de las Farc ha ido recogiendo ciertos temas con fuerza en la opinión pública, como decir el anticlientelismo, la denuncia de prácticas y funcionarios corruptos, la resistencia a la globalización y al neoliberalismo, la defensa de la descentralización y de la democracia participativa.

Con matices, tensiones —e incluso enfrentamientos— el ideario político de las Farc ha sido compartido por sus socios desarmados: el pc, en una relación ambigua, cambiante y prolongada; la up, fruto de la apertura electoral de los 80 y atrocemente diezmada; y el Movimiento Bolivariano, partido clandestino de los últimos años.

Sin una ideología compartida no podría explicarse la sostenida unidad interna de las Farc, pese a su crecimiento numérico y a la creciente degradación de la guerra. Esa ideología se encarna y se refuerza en prácticas institucionales y en una “cultura organizacional” que incluye mitos (la “Co-

lumna de marcha”...), héroes (Bolívar, Jacobo Arenas...), ritos (sesiones de autocrítica, juicios revolucionarios), tradición de padres a hijos guerrilleros, escuelas de formación e indocctrinamiento continuado (Ferro y Uribe, 2002).

Lo dicho para las Farc básicamente vale para otras organizaciones guerrilleras, con una salvedad significativa. Aunque todos los grupos se inspiran en el marxismo, cada guerrilla es una “secta” nacida de las divisiones en el “campo socialista”: la línea china (epl), la cubana (eln), la soviética (Farc). Separadas por tesis substantivas y concepciones estratégicas, no menos que por odios cultivados al calor de una historia compartida, estas sectas llegan a veces a choques militares, a veces coexisten y otras veces cooperan sobre el terreno o constituyen alianzas frente al Estado (la “Coordinadora guerrillera Simón Bolívar” fue el intento más reciente).

Pero ninguna guerrilla —desmovilizada o existente— ha logrado imponer o negociar reformas substantivas; y ningún presidente, candidato o directorio político ha planteado claramente las reformas “objetivas” que estaría dispuesto a convenir con la insurgencia. Pese a que está destruyendo el país, la guerra no ha entrado aún a la política.

El eln, en particular, nació en contrapunto a la idea, por entonces ortodoxa, de la guerrilla como simple autodefensa campesina: la revolución socialista no vendrá si no es jalónada por una vanguardia político-militar y por eso el primer punto de su primer manifiesto era “la toma del poder para las clases populares” (1965: 117). De aquí se siguen diferencias con las Farc, que pueden resumirse en que éstas son más un “ejército revolucionario” mientras aquel es más un “partido en armas”; las Farc están cerca de los colonos y el eln de los sindicatos; las unas son agraristas y el otro es petrolero; el uno, si se quiere, es más político, las otras más militares. Pero en ambos hay un proyecto revolucionario, unas creencias que unifican y *en algún grado* contribuyen a moldear la vida interna de la organización, sus relaciones con la comunidad, sus prioridades y sus métodos.

Sin que aprueben los métodos de la guerrilla, simpatizan con ella o haya siquiera oído sus discursos, también es indudable que muchos colombianos profesan una ideología justiciera o cultura de reivindicación más o menos explícita o borrosa. La realidad social justifica por supuesto el descontento, da pie al resentimiento y alimenta la actitud

contestataria. En este sentido, pues, la guerrilla forma parte de una matriz que abarca mucho más que sus combatientes, sus redes de apoyo y sus simpatizantes —lo cual, como dirá el Capítulo 16, es fuente de confusiones trágicas.

Otra muestra de la confusión es el hecho de que los paramilitares apelen a esa misma cultura de reivindicación para validarse como proyecto político; la plataforma de las auc, por ejemplo, demanda reforma agraria, reforma urbana y otras medidas redistributivas. Más precisamente, esta organización se autodefine como un “movimiento político-militar de carácter antsubversivo en el ejercicio del uso al derecho de la legítima defensa que reclama las transformaciones del Estado, pero no atenta contra él” (auc, 1997). Así, aunque los paramilitares surgen como respuesta puramente local y militar a las guerrillas, luego buscan cierta unidad nacional, adoptan un discurso ideológico, ganan apoyo de opinión e incursionan en la política mediante sus propios aparatos desarmados (como lo fue el Movimiento de Renovación Nacional, Morena) o el patrocinio discreto de ciertos candidatos. En este sentido más limitado vale pues decir que las autodefensas son una fuerza política, cuyas ideas *de algún modo* se reflejan en sus estrategias y sus actuaciones.

2. Esfuerzos y logros

Sería muy injusto —y además muy erróneo— dejar en este punto la impresión de que el Estado no haya hecho nada para resolver el conflicto, de que no se haya logrado nada, o de que todas las élites sean igualmente culpables del fracaso. En este Informe, el lector hallará referencias incontables a lo que se ha intentado y lo que se ha logrado por acción de los gobiernos, las élites —y también, de la gente del común— por atender cada faceta del conflicto. Para dar apenas un primer brochazo, subrayemos que, a pesar de todo, Colombia ha logrado mantener su democracia y su respeto básico al Estado de derecho, o que hubo crecimiento económico y mejoría social durante casi cada año de estas cuatro décadas. Específicamente respecto del conflicto, subrayemos que el Estado ha evitado que la insurgencia avance a la “guerra de posiciones”, que haya un centímetro del territorio donde la fuerza

pública no pueda ingresar, o que la guerrilla gane simpatía interna o internacional; el gasto militar ha aumentado de modo sustantivo, las Fuerzas Armadas se han modernizado, la inversión pública y la presencia del Estado en regiones de conflicto se han multiplicado, la descentralización ha progresado más que en el resto de América Latina, la Constitución del 91 abrió horizontes y espacios para “democratizar la democracia”, se han dado varios procesos de diálogo y varias desmovilizaciones exitosas, se han salvado miles de vidas gracias al heroísmo callado de soldados, policías, gestores

Las guerrillas colombianas, sin excepción, han adoptado un programa político, se han aliado y dividido por creencias políticas, han hecho proselitismo y “trabajo de base”, han creado o contado con un movimiento político desarmado, han participado en diálogos y acuerdos con autoridades nacionales o locales y con organizaciones políticas diversas.

de paz y gente —mucha gente— del común. Es otra vez, la paradoja de Colombia: un país lleno de creatividad y de pujanza, un país que no se rinde pero que no ha podido dejar atrás el llanto.

3. El conflicto y el centro

Si algún lector recibió la impresión de que hay “dos Colombias” separadas, de que el centro puede entenderse sin periferia o viceversa, nos afanamos a corregir el malentendido: esta Colombia y “la otra” son arte y parte de un sólo conflicto que se alimenta de ambas, se expresa en ambas y necesita resolverse en ambas. De entrada, la distinción entre “centro” y “periferia” es apenas un recurso conceptual y el límite geográfico entre los dos es —lo habrá sentido el lector— cada día más borroso. Es más: aunque el conflicto exista *principalmente* en la “periferia”, su raíz, su motor y su objetivo están *principalmente* en “el centro”. Se enuncian, por ahora, dos conexiones importantes:

- Con índices de pobreza rural que han ido desde 40% hasta 87% en los últimos treinta años, con desempleo urbano entre 13% y 21%, con un sector informal o de rebusque que ocupa dos de cada tres trabajadores, las puertas están abiertas para que campesinos y marginales de la ciudad migren en busca de una vida mejor o menos peor en esa “tierra nueva” que ofrece ser la frontera. Y así, la dureza del

conflicto no ha sido óbice para sostener el proceso de colonización reseñado al comienzo del capítulo. De hecho, la población en los departamentos eje de “la otra Colombia” (Meta, Arauca, Guaviare, Casanare, Amazonas, Putumayo, Guainia, Vichada) aumentó de 342.304 en 1964 a 1.866.853 en el 2000 de acuerdo con las proyecciones del Dane.

- El límite supuesto entre las “dos Colombias” se ha borrado ante todo porque ninguna persona que resida en el territorio nacional está hoy exenta de sufrir el conflicto en carne propia: cilindros de gas, bombas, asesinatos, secuestros o extorsiones se dan en cualquier vereda, pueblo o ciudad. Pero la omnipresencia física del conflicto no es incompatible con su marginalidad política. Primero, porque la gran mayoría de la gente vive la “guerra” como inseguridad o amenaza criminal, no como confrontación o como esperanza. Segundo, porque no hacen falta muchos sino pocos individuos armados para causar daño, alarma y conmoción de gran escala; en un país con la extensión y población de Colombia, 32 mil guerrilleros y paramilitares (16.580 de las Farc, 4.500 del eln y 10.560 de las auc, según los estimativos más autorizados⁵), son más que suficientes para llevar la guerra a todos los rincones, aunque no sean sino siete de cada diez mil habitantes en nuestros campos y ciudades.

Comoquiera se lo defina, el “centro” está pues siendo cada vez más afectado por el conflicto. No sólo porque los

hechos de violencia se extiendan más y más a las ciudades o golpeen más y más a las clases altas, sino por tres mecanismos que serán examinados con algún detalle en próximos capítulos:

- En la mente y en el discurso de muchos insurgentes sigue estando el sueño de la revolución, que necesariamente pasa por la derrota y control del Estado central: la guerra, para ellos, es esencialmente política.

- Más allá o más acá del querer de sus actores, la guerra pasó a tener gran incidencia sobre las relaciones exteriores del país. Esto se debe más que todo al nexo entre los armados y el tráfico de drogas, lo que hace del conflicto un “interés vital” para Estados Unidos. También cuenta la globalización, que hace más sensitivo el flujo de inversiones a los problemas de seguridad local. Y así, para las élites colombianas, la guerra se volvió “política” aunque sus enemigos no sean “políticos” sino apenas “criminales”.

- Sea o no sea política su guerra, las necesidades financieras del grupo armado bastarían para encaminar sus actos hacia el centro, donde se encuentra por supuesto la gran riqueza.

Como meta ideal para los unos, como problema principal para los otros, como sustento económico para todos, el centro está pues en el centro del conflicto.

Bibliografía y referencias

- auc (1997), *Constitución de las Autodefensas Unidas de Colombia*, Urabá, 18 de abril de 1997, en www.colombialibre.org.
- Banco Mundial (2000), *Informe sobre el desarrollo mundial*, Madrid, Ediciones Mundi-Prensa.
- Barbosa Estepa, Reinando (1995), “Paraestados y crisis institucional en la Orinoquia colombiana” en Javier Guerrero (compilador), *Iglesia, movimiento y partidos: política y violencia en la historia de Colombia*, Tunja, Colección Memorias de Historia, volumen 4, pp. 135-163.
- Castaño, Carlos (2001), *Mi confesión*, Bogotá, Oveja Negra.
- Deas, Malcom (1993), *Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas*, Bogotá, Tercer Mundo Editores.
- (2002), “Muertos de la risa”, en revista *Semana*, n° 9646, 17 de junio de 2002.
- eln (1965), Manifiesto de Simacota (7 de enero de 1965), en www.eln-voces.com; también en Corporación Observatorio para la Paz (2001), *Las verdaderas intenciones del eln*, Bogotá, Intermedio Editores.
- Farc (1966), Declaración de la ii Conferencia del Bloque Guerrillero del Sur de Colombia, 22 de abril a 5 de mayo 1966, en *Farc, por la liberación nacional, presencia de la dignidad*, 1966, sin ciudad, sin editor.
- Ferro, Juan Guillermo y Graciela Uribe (2002), *El orden de la guerra: Las Farc-ep entre la organización y la política*, Bogotá, Centro Editorial Javeriano.
- Foran, John (1997), “The Comparative-Historical Sociology of Third World Social Revolutions: Why a Few Succeed, Why Most Fail”, en John Foran (ed.), *Theorizing Revolutions*, Londres, Routledge, pp. 227-267.
- Garay, Luis Jorge (1999), *Construcción de nueva sociedad*, Bogotá, Tercer Mundo/ Cambio 16 (Libros de la Mesa, n° 2).
- García, Clara Inés (editora) [2003], *Fronteras, territorios y metáforas*, Medellín, Hombre Nuevo Editores/ Iner/ Universidad de Antioquia.
- Gómez B., Hernando (2000), *El lío de Colombia. ¿Por qué no logramos salir de la crisis?*, Bogotá, Tercer Mundo Editores.
- Goodwin, Jeff (1988), *States and Revolutions in the Third World: A Comparative Analysis*, disertación de doctorado, Boston, Harvard University.
- (1997), “State-Centered Approaches to Social revolutions”, en John Foran (ed.), *Theorizing Revolutions*, Londres, Routledge, pp. 11-37.
- Gouësset, Vincent (1998), “El territorio colombiano y sus márgenes. La difícil tarea de la construcción territorial”, en *Territorios. Revista de Estudios Regionales y Urbanos*, n° 1, agosto 1998-enero 1999, Bogotá, cider (Universidad de los Andes).
- Gutiérrez, Francisco (2001), “Inequidad y violencia política: una precisión sobre las cuentas y los cuentos”, en *Análisis Político*, n° 43, mayo-agosto de 2001, Bogotá, iepri (Universidad Nacional).
- Lachman, Richard (1985), “Feudal Elite Conflict and the Origins of English Capitalism”, en *Politics and Society*, vol. 14, n° 3, pp. 349-378.
- (1997), “Agents of Revolution; Elite Conflicts and Mass Mobilization from Medici to Yeltsin”, en John Foran (ed.), *Theorizing Revolutions*, Londres, Routledge, pp. 73-101.
- Melo, Jorge Orlando (1990), prólogo a Alfredo Molano, *Aguas arriba. Entre la coca y el oro*, Bogotá, El Áncora Editores.
- Molano, Alfredo (1990), *Aguas arriba. Entre la coca y el oro*, Bogotá, El Áncora Editores
- (1986), *Selva adentro. Una historia oral de la colonización del Guaviare*, Bogotá, El Áncora Editores.
- (1999), *Siguiendo el corte. Relatos de guerra y de tierras*, Bogotá, El Áncora Editores.
- (1998), *Trochas y fusiles*, Bogotá, El Áncora Editores.
- North, Douglas C. (1990), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press.
- Nozick, Robert (1974), *Anarquía, Estado y utopía*, México, Fondo de Cultura Económica, 2a edición, 1988.
- Posada Carbó, Eduardo (1998), *Colombia: The Politics of Reforming the State*, Londres, Institute of Latin American Studies, University of London.

- Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (2003), *Bases del Plan Nacional de Desarrollo de Desarrollo 2002-2006*, Bogotá, DNP.
- Richani, Nazih (2002), *Systems of Violence. The Political Economy of War and Peace in Colombia*, Albany, suny Press.
- Romero, Mauricio (2003), *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*, Bogotá, Editorial Planeta/ iepri.
- Sánchez, Gonzalo y Ricardo Peñaranda (eds.) (1991), *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá, Cerec.
- Sánchez, Gonzalo y Donny Meertens (1983), *Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en Colombia*, Bogotá, El Áncora Editores.
- Skocpol, Theda (1979), *States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia, and China*, Londres, Cambridge University Press.
- Tilly, Charles (1975), “Western State-Making and Theories of Political Transformation”, en Ch. Tilly (ed.), *The Formation of National States in Western Europe*, Princeton (N.J.), Princeton University Press.
- undp (2000), *Human Development Report 2000*.
- Uribe, María Teresa (1997), “La negociación de los conflictos en el ámbito de viejas y nuevas sociabilidades”, en *Conflicto y contexto. Resolución alternativa de conflictos y contexto social*, Bogotá, Tercer Mundo Editores/ Instituto ser de Investigaciones/ Colciencias, pp. 165-180.
- Viera, Gilberto (1965), “Nueva etapa en la lucha del pueblo colombiano”, en *Documentos Políticos*, febrero-marzo.
- Wickham-Crowley, Timothy (1992), *Guerrillas and Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956*, Princeton, Princeton University Press.